

RESOLUCIÓN No. 519

(30 DE DICIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL RECORRIDO
146 DEL 30 DE ABRIL DE 2014"

El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la Resolución No. 162 del 24 de febrero de 2005, el Decreto 1541 de 1978, la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Auto No. 278 del 12 de junio de 2015, CORALINA dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y formular cargos en contra de la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, por presunta infracción de normas protectoras de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, relacionado con el vertimiento de aguas residuales producto del desarrollo de las actividades domesticas en la vivienda de su propiedad, ubicado en el barrio Buenos Aires, en la isla de San Andrés, contraviniendo de esta manera las siguientes disposiciones:

- Numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3, Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 3, Parte 2, libro 2, del Decreto 1076 de 2015, que establece que no se admite vertimiento en calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
- Artículo 2.2.3.2.20.5, sección 20, capítulo 2, título 3, parte 2, libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que prohíbe verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 03 de julio del 2015.

Que dentro del término legal establecido para que el encausado, presentara escrito de descargos, aportara o solicitara la práctica de pruebas respecto del acto administrativo que dio inicio al proceso sancionatorio; guardó silencio, dejando precluir la oportunidad concedida para tal efecto.

Que mediante Auto No. 400 del 13 de agosto de 2015, CORALINA, ordenó abrir el periodo probatorio, teniendo como pruebas las documentales recaudadas con el lleno de los requisitos legales; y se decretaron:

- Oficiase al SISBEN de la Isla de San Andrés, para que certifique cual es el nivel de Sisbén de la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla;
- Oficiase al Departamento Administrativo de Planeación Departamental, para que certifique en que estrato social se encuentran registrado la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla;

Que el expediente a folio 32 se observa respuesta dada por la Secretaria de Planeación que fue aportada mediante escrito con radicación No. 21539 del 26 de septiembre de 2016, el cual expuso que la valoración en que se encontraba la encausada correspondía a un puntaje de 46.67, el cual corresponde al nivel uno (1) en la ficha de clasificación socioeconómica

Mediante Auto No 560 del 13 de diciembre de 2016, se cerró el periodo probatorio y se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días para que la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, presentara sus alegatos de conclusión.

Que la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, guardo silencio, no presentó alegatos de conclusión.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que conforme con lo prescrito en los artículos 80¹ de la Constitución Política y 1° de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009², la potestad sancionatoria³ en cuestiones ambientales se halla en cabeza del Estado a través de las autoridades ambientales.

¹ "Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" *Negrillas fuera de texto.*

² Por la cual se establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones.

³ Facultad que tienen el Estado de Investigar ciertas conductas de los administrados y la imposición de medidas administrativas restrictivas de sus derechos ante la desobediencia de las normas que señalan aquéllas.

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Que, a su vez, la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológicas y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades Ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar la prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.

Que el artículo 37 de la Ley 99 de 1993, ordenó la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, como una Corporación Autónoma Regional.

Que el Director General de CORALINA nombrado a través de Acuerdo No. 010 del 04 de diciembre de 2019, emitido por el Consejo Directivo de la Corporación, y posesionado mediante Acta No. 001 del 26 de diciembre de 2019, haciendo uso de las facultades y funciones otorgadas por la Ley 99 de 1993, y demás reglamentos, es competente para proferir este Acto Administrativo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, este despacho se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se tomen.

Que en los artículos 17 al 31 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, se encuentra el procedimiento sancionatorio que debe surtir como consecuencia de la comisión de infracciones en materia ambiental, al cual le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que con apego al Procedimiento Sancionatorio Ambiental establecido en la mencionada ley, amparados en todo momento por el debido proceso que le asiste al aquí encartado, la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha surtido las correspondientes etapas o actuaciones administrativas dentro de la investigación ambiental que se adelanta, tal como consta en el expediente.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

A través de informe técnico de seguimiento No. 484 del 24 de diciembre de 2014, se conceptuó que la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, **NO CUMPLIO** con los acuerdos y compromisos establecidos en el acta No. 179 del 30 de abril de 2014, toda vez que, se pudo observar que persiste la infracción y violación de la normatividad ambiental por vertimiento de aguas residuales procedentes de la vivienda de su propiedad.

De otro lado cabe resaltar que la encartada teniendo la oportunidad procesal para presentar descargos, solicitar y/o aportar pruebas para controvertir las disposiciones establecidas por parte de esta corporación ambiental, la misma guardó silencio.

Analizado el caso sub examine nos damos cuenta que la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, no atendió el mandato INMEDIATO para solucionar la problemática referente al vertimiento de aguas residuales provenientes de su vivienda toda vez que se pudo establecer que aún persiste la infracción, concluyéndose por parte de esta autoridad ambiental que con este hecho existió una infracción al medio ambiente y que por esto la encartada debe ser sancionada por cuanto no es permitido que las personas hagan vertimientos de aguas residuales, toda vez que con su actuar ponen en riesgo la salud de las personas, puesto que estas conductas son causantes de toda clase de plagas tales como moscas, mosquitos e inclusive roedores.

En las últimas décadas la mayoría de países del mundo han mostrado particular interés en crear mecanismos y programas que procuren la preservación y restablecimiento del medio ambiente, ante la inminente destrucción y deterioro en que se encuentran los recursos por causa de la irresponsabilidad humana, el derecho no puede ser ajeno a esta importante problemática, que exige ser abordada debido al riesgo en que se encuentra la vida del ser humano, es por esto que cada Estado ha enfrentado el tema de acuerdo con sus posibilidades, legislando en procura de un medio ambiente sano y apto para las presentes y futuras generaciones, por lo que no se puede aceptar que los ciudadanos de la Isla hagan vertimientos porque con esto se está contaminando como ya se dijo el ambiente que debe ser sano y óptimo para el disfrute de todos.

En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando la corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental, que los seres humanos están en la obligación de proteger.

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Además, se observa que la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, guardo silencio y no presento escrito de descargos, por lo tanto, este despacho se limitara a imponer la sanción de acuerdo a la normatividad que lo ampara.

Así las cosas, se encuentra plenamente demostrado la violación de las normas ambientales, en virtud de las cuales se inició por parte de esta autoridad procedimiento sancionatorio en contra de la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés isla, debido a que la actividad realizada está prohibida claramente por la normatividad ambiental, circunstancia por la cual es procedente la imposición de una sanción en su contra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, que señala:

"Sanciones: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. *Multas diarias hasta por cinco mil (500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
2. *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.*
3. *Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
4. *Demolición de obra a costa del infractor.*
5. *Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
6. *Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.*
7. *Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."*

Que en relación con las anteriores sanciones, la misma ley define la multa como "el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales"⁴.

DE LA MULTA

Que el Decreto No. 3678 de 2010, "Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la ley 1333 de 21 de junio de 2009, y se toman otras disposiciones" establece los criterios generales que se deben tener en cuenta por parte de las Autoridades Ambientales para la imposición de las sanciones descritas en precedencia.

Que el artículo 4° del Decreto 3678 de 2010, dispone:

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:

B Beneficio ilícito

a Factor de temporalidad

i Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca Costos Asociados

Cs Capacidad socioeconómica del infractor.

Dónde:

Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado.

Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si esta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.

⁴ Artículo 43 de la ley 1333 de 2009.

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Grado de afectación ambiental: Es la media cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la resistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009.

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria."

Para resolver, y en consideración a que CORALINA, es la Autoridad Ambiental competente dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para imponer sanciones cuando la situación así lo amerite y a efectos de tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de la Subdirección Gestión ambiental, a través del Grupo de Control y Vigilancia, efectuó el cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual se valoraron los criterios mencionados con anterioridad.

Es así como, a través del Informe Técnico No. 298 del 2020 el Grupo de Control y Vigilancia de CORALINA, manifiestan que la tasación de la multa dentro de los lineamientos establecidos en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, fue por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$2.905,743.41) (...), así:

"(...)"

IV.I Beneficio Ilícito (B)

La variable Beneficio ilícito (B), se refiere a la ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta. Se obtiene de relacionar el ingreso económico como producto de la infracción, con la capacidad de detección de la conducta (como un factor determinante en el comportamiento del infractor).

Para el cálculo del Beneficio ilícito, es necesario aplicar la siguiente ecuación:

$$B = \frac{y \cdot (1-p)}{p}$$

Dónde:

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor

Y: Sumatoria de ingresos y costos

P: Capacidad de detección de la conducta, la cual está dada en función de las condiciones de la autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores.

- Capacidad de detección baja: $p=0.40$
- Capacidad de detección media: $p=0.45$
- Capacidad de detección alta: $p=0.50$

1. Sumatoria de Ingresos y Costos

En virtud de lo anterior, en primer lugar, y para obtener la variable Beneficio Ilícito (B), es necesario calcular la sumatoria de ingresos y costos (Y), para lo cual debe calcularse:

- Ingresos directos (y_1);
- Costos evitados (y_2);
- Ahorros de retraso (y_3);

De esta manera, la variable (y) corresponderá a la suma simple de los ingresos y/o costos implícitos. ✓

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

1.1 Cálculo de la variable Ingresos Directos (y_1):

Este tópico se refiere a los ingresos que recibe el presunto infractor como producto de la realización del ilícito.

Dicho lo anterior, y atendiendo el concepto de ingreso directo, así como teniendo en cuenta que la infracción presuntamente atribuida a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, se desprende de realizar o permitir la actividad de vertimiento de aguas residuales ubicado en el sector del barrio buenos aires "altos de natania"; consideramos que como producto de dicha conducta el infractor no obtuvo ingreso económico directo.

Así las cosas, y sin dejar a un lado las sugerencias que para estos casos establece el Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental; el ingreso directo ilícito del posible infractor, es decir y_1 , sería igual a CERO (0).

Dicho lo anterior:

$$y_1: 0$$

1.2 Cálculo de la variable Costos Evitados (y_2):

Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la legislación ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.

Los costos evitados por parte de la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, fueron los relacionados con la inversión que en su momento debió adelantar para el cese en su momento del vertimiento de agua residual. Sin embargo, no contamos con los elementos probatorios necesarios que nos permitan determinar con certeza el valor en pesos de los costos que evito el presunto infractor como fruto de su conducta.

Por lo tanto, a este atributo se le asigna un valor de cero (0):

$$y_2: 0$$

1.3 Cálculo de la variable Ahorros de Retraso (y_3):

Esta variable se refiere a la utilidad obtenida por el posible infractor y expresada en ahorros, derivada de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley. En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se realizaron con posterioridad a lo exigido legamente. Por tanto, el presunto infractor realiza la inversión requerida pero su utilidad radica en el retraso.

Así las cosas, consideramos que para el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta el expediente PM-RAA-02-035 de 2015, en el cual reposa los informes técnicos y documentación pertinente para la elaboración de la presente tasación, no es posible determinar la variable ahorros de retraso (y_3), dado que los costos para realizar las adecuaciones mencionadas anteriormente no se encuentran en la información del expediente y de acuerdo a lo establecido en la metodología para el cálculo de multas ambientales consideramos que para este variable la ponderación es igual cero (0).

Entonces:

$$y_3: 0$$

2. Capacidad de Detección de la Conducta (P)

Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental, en este sentido, y teniendo en cuenta que CORALINA realiza recorridos diarios en la Isla de San Andrés, y cuenta con un sistema de recepción y atención de denuncias; con el fin de detectar conductas que transgredan la normatividad ambiental vigente la capacidad de detección de la infracción se considera como alta.

Es decir que:
 $P = 0.50$

3. Procedimiento para calcular el beneficio ilícito

Una vez obtenidos los datos como ingresos y/o costos, en conjunto con la capacidad de detección de la conducta, mediante la aplicación de la siguiente ecuación, se procede a la estimación de la variable Beneficio Ilícito:

Por lo tanto,

$$B = \frac{0 * (1 - 0.50)}{0.50}$$

Dónde:

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor
Y: Sumatoria de ingresos y costos
P: Capacidad de detección de la conducta

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Así las cosas:

B=0

IV.II CÁLCULO DE LA VARIABLE FACTOR DE TEMPORALIDAD (α)

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.

Con base en lo anterior, es preciso mencionar que una vez analizada la información que reposa en los archivos de CORALINA (documentación de expediente PM-RAA-02 035-15), consideramos que la duración del hecho ilícito está determinada por la detección de la infracción el 30 de abril y seguimiento realizado el 24 de diciembre. Por tal razón, se considera que la infracción se realiza de manera continua en el tiempo.

Así las cosas, y con base en lo establecido en la Resolución 2086 de 2010 y en el Manual Conceptual y Procedimental – Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental, el Factor de Temporalidad de la infracción es:

(α): 2,9203

IV.III Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo(i)

Teniendo de presente, que el proceso sancionatorio iniciado por CORALINA mediante informe No 484 del 24 de diciembre de 2014, halla su motivación en el incumplimiento del acta de compromiso No. 179 de 30 de abril de 2014, proferida por CORALINA en el cual la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO se compromete a realizar a suspender el vertimiento que realiza la descarga hacia la vía pública. Y así evitar el vertimiento que se vienen generando; y por lo tanto, ello redundará en la generación de una serie de riesgos potenciales de afectación, este tópico será calculado a través de la variable Evaluación del Riesgo (i), establecida en la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental.

Es por esto que se evaluará el referido caso, a partir del riesgo que se deriva del incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Acta de Compromiso No. 179 de 30 de abril de 2014; teniendo presente los siguientes dos aspectos:

- La probabilidad de ocurrencia de la afectación (o)
- La magnitud potencial de la afectación (m)

1. Identificación de agentes de peligro

Previo a evaluar la probabilidad de ocurrencia y magnitud de la afectación, de acuerdo con la teoría es necesario adelantar una identificación de los agentes de peligro que constituyen un riesgo para producir una afectación potencial.

Así las cosas, y como quiera que la infracción objeto de la presente evaluación, implicó el incumplimiento de una serie de actividades establecidas como medidas de prevención para evitar afectaciones; los agentes de peligro identificados fueron de tipo biológicos.

2. Identificación de potenciales afectaciones asociadas

Una vez identificado (s) el (los) agente (s) que posee (n) un potencial de afectación ambiental, a continuación se procede a identificar las acciones que podrían derivar en potenciales impactos, en los cuales se puede concretar la infracción, así:

- Vertimiento de aguas residuales hacia espacio público: este tipo de acción puede ser un potencial generador de la propagación de enfermedades y vectores en la comunidad, disminuyendo así la calidad de vida de residentes y transeúntes.

3. Magnitud potencial de la afectación (m)

Para el cálculo de la magnitud potencial de la afectación se aplicó la metodología de valoración de la importancia de la afectación, en la cual se supuso un "escenario con alteración", tal cual lo establece el Manual Conceptual y Procedimental para la Tasación de Multas, así:

Tabla No. 1: Calificación y/o Ponderación y su Respectiva Justificación

Atributos	Definición	Calificación y/o Ponderación y su Respectiva Justificación
Intensidad = (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.	La presunta infracción, atribuida por la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, se desprende del vertimiento de aguas residuales provenientes de su vivienda hacia la vía pública, por tanto, teniendo en cuenta la definición de intensidad como el grado de incidencia sobre el bien de protección; consideramos que para el caso que nos ocupa el vertimiento de aguas residuales fue sobre vía pública (cemento) y por tal razón, existe un grado de incidencia sobre el bien de poca relevancia, por lo tanto se establece <u>una ponderación de un (1) punto</u> para la intensidad de la afectación.
Extensión = (EX)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.	Para este impacto se considera que el vertimiento proveniente de la vivienda no sobrepasa un área mayor a una hectárea, de acuerdo a lo que se puede evidenciar en los registros fotográficos del expediente antes mencionado. Por lo tanto este atributo tendrá una ponderación de <u>un (1) punto</u> .
Persistencia = (PE)	Se refiere al tiempo que	En los vertimientos de aguas residuales domésticos la carga contaminante es de gran proporción biológica permitiendo procesos naturales de biodegradación,

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

	permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción	Tanto en el recurso agua como en el recurso suelo. Aunado a ello, de acuerdo a las anotaciones consignadas en los informes técnicos de seguimiento al compromiso entre la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO CORALINA se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) Años De acuerdo a lo anterior, se le asigna una ponderación de tres (3) punto.
Reversibilidad = (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	La capacidad de recuperación para los recursos agua y suelo por la afectación del vertimiento de aguas residuales domésticas, la cual carece de contaminantes químicos de gran relevancia (ej. Mercurio), permite deducir que por procesos de biodegradación, los recursos volverán a sus condiciones anteriores al vertimiento en un periodo menor a 1 año. Con respecto a lo anterior se considera una ponderación de un (1) punto.
Recuperabilidad = (MC)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	Teniendo en cuenta lo expuesto en el atributo de reversibilidad, consideramos que de adoptarse oportunamente medidas correctivas y de gestión ambiental, los bienes de protección afectados se podrían ver recuperados en un plazo inferior a seis (6) meses, y por lo tanto a este atributo se le asigna una ponderación de un (1) punto.

Una vez valorados los atributos, a continuación se procede a determinar la importancia de la afectación como medida cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la siguiente relación:

Ecuación: $I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC$

Tabla No 2: Calificación de la importancia de la afectación

ATRIBUTOS	PONDERACIÓN
Intensidad (IN)	1
Extensión (EX)	1
Persistencia (PE)	3
Reversibilidad (RV)	1
Recuperabilidad (MC)	1
$I = (3*1) + (2*1) + 3 + 1 + 1$ $3 + 2 + 3 + 1 + 1$	
Importancia (I)	10

Con base en lo anterior, es decir teniendo en cuenta una importancia de la afectación de ocho (10), así como de acuerdo con lo establecido en la tabla No. 10 de la Metodología para la Tasación de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental vigente, se considera el nivel potencial de impacto como baja, con una calificación de treinta y cinco (35).

4. Probabilidad de ocurrencia (o)

De acuerdo con lo establecido en la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, la probabilidad de ocurrencia de la afectación debe ser calculada, con base en la siguiente tabla:

Tabla No. 3: Probabilidad de ocurrencia de la afectación

CRITERIO	VALOR DE PROBALIDAD DE OCURRENCIA
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy baja	0.2

Así las cosas, y de acuerdo con lo comentado en apartes anteriores, la probabilidad de ocurrencia de la afectación para la infracción objeto de la presente evaluación se considera como baja con una calificación de 0.4. Esto obedece a las siguientes consideraciones:

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

- Vertimiento de aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda hacia la vía pública.

5. Determinación del riesgo

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia, se procede a continuación a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente calculadas:

$$r = o \times m$$

Donde:

R = Riesgo

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m = Magnitud potencial de la afectación

$$r = 0,4 \times 35$$

$$r = 14$$

Ahora bien, una vez obtenido el valor de riesgo, a continuación se procede a determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

$$R = (11.03 \times SMMLV) \times r$$

Donde:

R = Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente (en pesos) para el año en que se inició el proceso sancionatorio.

r = Riesgo

Por lo tanto:

$$R = (11.03 \times 644.350) \times 14$$

$$R = \$ 7'107.180 \times 14$$

$$R = \$ 99'500.527$$

Entonces:

$$R = \$ 99'500.527$$

IV.IV CÁLCULO DE LA VARIABLE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A)

Esta variable se refiere a aquellos factores que están asociados al comportamiento del infractor. La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, define las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad en materia ambiental.

Así las cosas, y una vez consultadas las tablas No.13 y 14 de la Metodología para la Tasación de Multas por Infracciones a la Normatividad Ambiental vigente, así como los artículos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Ambiental, Ley 1333 de 2009; se puede concluir que a la infracción objeto del presente informe, no aplica atenuante ni agravante alguno:

Así las cosas:

Agravantes: 0,0

Atenuantes: - 0,0

Por lo tanto:

Dicho lo anterior:

$$A = 0,0$$

IV.V CÁLCULO DE LA VARIABLE COSTOS ASOCIADOS (Ca)

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

⁵ De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Esta variable, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y sancionar es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.

De acuerdo con lo anterior, para el caso que nos ocupa, no se presentaron costos asociados.

Por lo tanto:

Ca: \$0

IV.VI CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (Cs)

Esta variable corresponde al conjunto de condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

Dado que el presunto infractor obedece a una persona natural, para determinar la capacidad socioeconómica del mismo, se revisó el expediente PM-RAA-02 Carpeta No. 035-15, en el cual se encuentra consignada información allegada de la Secretaría de Planeación en el cual se menciona que la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en San Andrés, Islas y todo su núcleo familiar se encuentran registrados en la base con un puntaje de 46.67 en la ficha de clasificación socioeconómica No. 3088 validados desde el 20 de mayo de 2009. En virtud de lo anterior, se pudo determinar un puntaje para el presunto infractor de 46,67 (ver tabla No. 5), lo cual equivale al nivel de SISBEN uno (1), como quiera que se encuentra en un rango $44.79 < 46.67 < 48.79$, lo que corresponde a una capacidad socioeconómica de 0.01.

Por lo tanto la Capacidad Socioeconómica establecida para la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO, es:

Cs: 0,01

Por último, una vez analizado todo lo anterior, de acuerdo con la Metodología adoptada mediante Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, y de acuerdo con los valores obtenidos a lo largo del presente informe para cada una de las variables, a continuación se procede a la aplicación del siguiente modelo matemático:

$$Multa = B + [(a \cdot i) \cdot (1 + A) + Ca] \cdot Cs$$

Donde:

B: Beneficio ilícito

a: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental
y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

Entonces:

$$Multa = 0 + [(1 \cdot 99'500.527) \cdot (1 + 0) + 0] \cdot 0,01$$

Luego, al reemplazar y aplicar el modelo matemático, se obtiene el siguiente resultado final (ver tabla No. 4):

Tabla No. 4: Resultados de la aplicación del modelo matemático y cálculo del valor final de la multa.

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Para las infracciones que no se concretan en afectación Ambiental, se evalúa el riesgo (r) = Probabilidad de Ocurrencia de la Afectación (o) * Magnitud Potencial de la afectación (m)		
Variables	Descripción de Vble	Vlr
B	Beneficio ilícito	-
α	Factor de temporalidad	2,92
i	Evaluación del riesgo	99.500.527,00
A	Circunstancias agravantes y atenuantes	-
Ca	Costos asociados	-
Cs	Capacidad socioeconómica del infractor	0,01
MULTA =		2.905.743,41

V. CONCEPTO TÉCNICO

Luego de desarrolladas cada una de las diferentes variables y/o criterios definidos en la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental vigente, adoptada mediante Resolución 2086 de 2010; la Subdirección de Gestión Ambiental se permite conceptuar, que en virtud de la trasgresión a la normatividad ambiental vigente, consistente en realizar o permitir la actividad de vertimiento de aguas residuales a la vía, en un predio ubicado en el Sector de la rocosa, **CORALINA PODRÁ SANCIONAR MONETARIAMENTE AL PRESUNTO INFRACTOR CON UNA MULTA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS. (\$ 2.905.743.41).**

Así las cosas, y de acuerdo con lo argumentado, y probado en la investigación se concluye que existe nexo, causa y efecto: La causa la omisión en el cumplimiento de la norma y el efecto la infracción y afectación ambiental; como consecuencia a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en san Andrés, Islas, es responsable ambientalmente.

Finalizando esta Corporación considera, que de acuerdo con las reglas de la sana crítica de la prueba y los principios del derecho es pertinente sancionar al infractor por no haber observado el contenido de las normas ambientales legales vigentes, por lo tanto la responsabilidad es endilgable a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en san Andrés, Islas, por la infracción antes mencionada.

Que con base en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

Dadas las precedentes consideraciones y en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar probado los cargos formulados mediante Auto No. 278 del 12 de junio de 2015, y en consecuencia declarar responsable a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en san Andrés, Islas, por el incumplimiento de normas protectoras de los recursos naturales y el ambiente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR, a la señora INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en san Andrés, Islas, con multa por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS (\$ 2.905.743.41).

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa deberá ser consignada en la Cuenta Corriente No. 334990090 del Banco Davivienda a nombre de CORALINA FONADE MULTAS, dentro de los cinco (5) días siguientes de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución. Igualmente deberá allegar copia de la consignación realizada a la Corporación.

PARAGRAFO SEGUNDO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a la Secretaria General al área de Presupuesto/Contabilidad de la Corporación para lo de su competencia y fines pertinentes.

PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento en los términos y cuantías indicadas, dará lugar a su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva, de la cual en virtud de la ley, se encuentran investidas las autoridades públicas del orden nacional.

ARTÍCULO TERCERO: La sanción impuesta mediante la presente providencia no exonera al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones establecidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de observar las normas sobre protección ambiental y sobre el manejo de los recursos naturales.

Continuación Resolución No. 519 de fecha 30 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la PROCURADURÍA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA DE SAN ANDRÉS ISLAS, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación; a la Oficina de Control, Circulación y Residencia - OCCRE, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, para su conocimiento, competencia y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Remitir copia a del presente acto administrativo a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la Corporación con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, con relación a su publicación en la página web o en el Boletín Oficial de CORALINA.

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la inscripción de la sanción que se impone mediante el presente acto administrativo una vez se encuentre ejecutoriado, en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y siguientes de la Ley 1333 de 2009, reglamentada por la Resolución Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT No. 0415 de 2010.

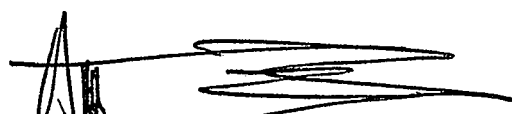
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente proveído a la señora **INDIRA MARIA CANTILLO CASTRO** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.986.622 expedida en san Andrés, Islas, de conformidad con lo establecido en el C.P.A.C.A.

ARTÍCULO NOVENO: Por Secretaría de la Subdirección Jurídica librense los oficios correspondientes.

ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición directamente ante la Dirección General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA-; y del mismo deberá hacerse uso personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés Isla, el treinta (30) de diciembre de 2020.


ARNE BRITTON GONZALES
Director General

Proyecto: C.M.H

Aprobó: S. Zapata 